

RECEPCIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CUBANO

“Llamamos la atención acerca del hecho, que el tratado, como tal, es una institución muy compleja cuyo análisis requiere de mucho tiempo y de muchas experiencias...”¹

Miguel A. D'ESTÉFANO PISANI

MSc. Yanitza ZALDÍVAR RODRÍGUEZ

Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya

yzaldivar@fh.uho.edu.cu

Lic. Lisandra GARCÍA LEYVA

Dirección Provincial de la Vivienda de Holguín

población@hol.inv.cu)

Remberto A. SÁNCHEZ MARTÍNEZ

Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya

remberto-sanchez@fh.uho.edu.cu)

País: Cuba

RESUMEN

Es innegable que el Derecho Internacional es instituido con la intención de tener una aplicación en aquellos países que consintieron en obligarse mediante una norma internacional, es por eso que si el Derecho Interno no es conformado con lealtad al Derecho Internacional, será un obstáculo para la correcta aplicación de este.

con lealtad al Derecho Internacional,

será un obstáculo para la correcta aplicación de este.

En el ordenamiento jurídico cubano, la ausencia en el Decreto-Ley 191 de

1999 “De los tratados internacionales” y en su legislación complementaria de una norma expresa sobre el sistema de recepción al que se afilia Cuba, afecta el reconocimiento de la jerarquía de los mismos en nuestro ordenamiento jurídico.

PALABRAS CLAVE: TRATADO INTERNACIONAL; ORDENAMIENTO JURÍDICO INTERNO; DERECHO INTERNACIONAL.

¹ D'ESTÉFANO PISANI, Miguel A., “Breve historia del Derecho Internacional”, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 2003, p. 224.

INTRODUCCIÓN

Resulta imposible ignorar la pauta que en nuestros días marca la internacionalización. Como consecuencia de esta los Estados deben adaptar o crear estructuras a raíz del contenido de los tratados y con ello viabilizar sus esfuerzos integradores. Esta idea se consolida al ser considerados los instrumentos jurídicos internacionales la fuente principal del sistema jurídico internacional, toda vez que a través de ellos se fomentan las relaciones multifacéticas que tienen lugar entre los sujetos del Derecho Internacional Público, contribuyendo a su desarrollo.

Desde esta perspectiva, es notoria la significativa importancia de los tratados en el plano internacional, sin embargo no puede ser obviado el papel que desempeñan en el ordenamiento jurídico interno de los Estados y para los cuales generan un conjunto de derechos y obligaciones. De ahí la importancia de recepcionar o incorporar los tratados internacionales en el ordenamiento nacional.

Por tales razones, no puede ser considerado el tratado un elemento impropio de nuestro ordenamiento jurídico, ya que es una realidad jurídica que deben tener en cuenta los operadores del Derecho y especialmente los órganos judiciales. Por consiguiente, resulta indispensable que se adopten por los Estados sistemas de recepción efectivos y se les confiera a esta fuente de Derecho la preeminencia necesaria en la correspondencia entre el marco convencional internacional y los ordenamientos jurídicos nacionales.

I. SISTEMAS DE RECEPCIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN EL DERECHO INTERNO DE LOS ESTADOS

El hecho de que los ordenamientos internos recepcionen en los tratados internacionales como principal fuente del Derecho Internacional, parte del reconocimiento que hace el Estado internamente de las normas que ha generado exteriormente. Es, por consiguiente, un elemento de conexión entre el ordenamiento jurídico internacional y el interno

La recepción, en el entorno cubano se ha definido como el acto jurídico complejo y soberano de derecho interno, mediante el cual se incorporan las

normas internacionales al ordenamiento jurídico interno de un Estado que ha manifestado su consentimiento en obligarse por ellas.²

Esta no se realiza de la misma forma en todos los Estados. Entre los sistemas para la recepción de tratados que coexisten en la doctrina internacional, tenemos:

- **Sistema de recepción automática o de incorporación:** A través de este mecanismo se aplica la norma internacional, una vez que el Estado haya manifestado su consentimiento y entre en vigor el tratado, sin que implique ningún acto posterior de conversión en norma interna, ni de incorporación al Derecho Interno.³ Desde la entrada en vigor, el tratado surtirá efectos directos en el Derecho Nacional y dichos efectos se reflejarán en los órganos del Estado y en sus individuos. Este sistema es acogido por constituciones como la de Perú⁴ y Estados Unidos de América.⁵
- **Sistema de recepción formal o especial o de transformación:** En este sistema es exigido por la normativa interna del Estado, como requisito expreso, que la incorporación del instrumento jurídico internacional ocurra a través de una ley interna, aprobada por el legislativo, que ordene su cumplimiento en el Derecho Interno; o mediante la publicación del tratado en la Gaceta Oficial como acto equivalente a su promulgación. Cumplido uno de estos requisitos, el instrumento jurídico internacional surtirá efectos en el ámbito interno. Las normas del tratado deben ser sustituidas, a cualquier nivel en la jerarquía de las leyes internas y regulaciones, ya sea a nivel constitucional o nivel de las leyes del legislativo. La entrada en vigor interna

² MORÉ CABALLERO, Y., *La interrelación entre el Derecho Internacional y el Derecho Internacional en Cuba a la luz de las doctrinas tradicionales*, en "International Law: Revista colombiana de Derecho Internacional" Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Mayo 2007, N° 9, p. 380.

³ Los mecanismos administrativos establecidos por el Estado para conocer y aprobar la norma internacional por su órgano legislativo, no deben entenderse como actos de incorporación.

⁴ Cfr. En la Constitución Política de Perú (1995), Título II, Capítulo II, Artículo 55, donde dispone: "Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del Derecho Nacional."

⁵ Cfr. La Constitución de los Estados Unidos de América (1787) en su Artículo 6, apartado 2º, donde regula: "Esta Constitución, y las leyes de los Estados Unidos que se expidan con arreglo a ella, y todos los tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad de los Estados Unidos, serán la suprema ley del país y los jueces de cada Estado estarán obligados a observarlos, a pesar de cualquier cosa en contrario que se encuentre en la Constitución o las leyes de cualquier Estado."

internacional del tratado se produce en momentos diferentes. Países como Francia regulan este sistema en sus constituciones.⁶

- **Carencia de regulación expresa:** En este caso la Constitución del Estado es omisa al no contener en su texto regulación expresa sobre la incorporación de los tratados al Derecho Interno. Para determinar el mecanismo de incorporación de la normativa internacional, se atenderá a la práctica administrativa o jurisdiccional.

En este aspecto de los mecanismos de recepción merecen especial mención las normas autoaplicativas. En la validez interna que tengan los tratados internacionales y su carácter vinculante radica el valor de la relación existente entre Derecho Interno y Derecho Internacional.

Independientemente del sistema de recepción del Derecho Internacional acogido por los diferentes Estados, existen normas, denominadas autoaplicativas o *self-executing*, o sea, por su naturaleza y contenido son recepcionadas automáticamente. Actualmente esa consideración se extiende a la mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos.

Las normas autoaplicativas han sido definidas como *“aquellas que permiten aplicarse por sí solas sin que sea necesario el trámite posterior de incorporación.”*⁷

Los requisitos que deben contener estas son, en primer lugar, que resulte posible derivar de ellas, de forma directa, ciertos derechos o pretensiones a favor de una persona que manifiesta interés legítimo en la aplicación de la regla en su caso, y que dicha regla, contenga una especificidad tal que pueda aplicarse judicialmente, sin sujeción a un acto legislativo o administrativo subsiguiente.

Una vez que se ha incorporado en el ordenamiento jurídico interno del Estado la norma internacional mediante uno de los sistemas de recepción de los tratados internacionales, dichas normas adquieren determinada jerarquía en la legislación nacional, otorgada fundamentalmente por la Constitución.

Eventualmente pudieran suscitarse contradicciones en la aplicación de los instrumentos jurídicos internacionales, de ahí deviene la importancia de

⁶ Cfr. La Constitución Francesa, donde regula en el Título VI, Artículo 55: *“Los tratados o acuerdos debidamente ratificados o aprobados tendrán, desde el momento de su publicación, una autoridad superior a las leyes, a reserva, para cada acuerdo o tratado, de su aplicación por la otra parte.”*

⁷ Vid. PINO CANALES, C., *La relación entre Derecho Interno-Derecho Internacional* en *“Temas de Derecho Internacional Público”*, Colectivo de Autores, Félix Varela, La Habana, 2006, p. 56.

determinar la jerarquía de los tratados en el ordenamiento interno del Estado. Este es un aspecto a tener en cuenta en el orden jurídico internacional, de ahí que la doctrina ha distinguido diferentes rangos:

- **Supraconstitucional:** Al tratado internacional les es concedido un valor superior al de la Constitución Política del Estado. Este sistema no está muy generalizado en la práctica internacional debido al gran valor que le confieren los Estados a sus Constituciones porque rigen la estructura y el funcionamiento de este. La Constitución de Holanda le otorga este rango a los tratados.⁸
- **Constitucional:** Este rango coloca a los tratados internacionales en una posición jerárquica igual a la de la Constitución del Estado, lo cual implica que las leyes ordinarias no pueden contradecir a los instrumentos jurídicos internacionales de los que este sea signatario. Países como la República Checa y la Eslovaca, mediante su ley fundamental, le otorga esta posición jerárquica a los tratados.
- **Supralegal:** En este rango las normas internacionales son superiores a las leyes nacionales, no así a la Constitución del Estado que es la norma fundamental y, por tanto, se encuentra por encima de las demás normas del ordenamiento. No obstante le confiere a los tratados un rango superior a las demás leyes. Algunas constituciones como la de Honduras les confiere este rango a los tratados.⁹
- **Legal:** Este rango equipara, por mandato constitucional del país, a la ley y a los tratados internacionales. En ese caso se aplica el principio de que la ley posterior deroga a la anterior, lo que significa que si una norma internacional ha sido incorporada mediante una norma interna, esta puede ser derogada por una norma posterior y el Estado responderá internacionalmente por los perjuicios que esta pueda causar. Esta posición es aplicada por países como México.¹⁰

⁸ Cfr. La Constitución Holandesa (1956) establece en su Sección Sexta, Capítulo 63º, apartado 1, que: “Cuando lo exija el desarrollo del orden jurídico internacional, podrá un tratado apartarse de los preceptos de la Constitución. En tal caso la ratificación solo podrá conferirse de forma expresa, y las Cámaras de los Estados Generales solamente podrán aprobar el correspondiente proyecto de ley por mayoría de dos tercios de los votos emitidos.”

⁹ Cfr. La Constitución Hondureña que dispone en su Capítulo III, Artículo 17: “Cuando un tratado internacional afecte una disposición constitucional, debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución antes de ser ratificado por el Poder Ejecutivo.” En el Artículo 18 regula: “En caso de conflicto entre el tratado o convención y la Ley prevalecerá el primero.”

¹⁰ Cfr. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su Título Séptimo, Artículo 133: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.”

- **Ausencia de regulación:** Se trata de que no existe un precepto constitucional sobre la jerarquía de los tratados, es decir, que los textos constitucionales no se proyectan o no reconocen conceptualmente su rango o valor dentro del Derecho Interno. La Constitución de Brasil y la Constitución de Uruguay se encuentran en esta situación.

II. ANTECEDENTES DE LA RECEPCIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN CUBA

En la Constitución de 21 de febrero de 1901,¹¹ se disponía que el Presidente de la República fuera el encargado de celebrar tratados internacionales y someterlos a la aprobación del Senado como requisito fundamental para que tuvieran validez en el territorio cubano.¹² Lo anterior era corroborado en el Artículo 47, como una de las atribuciones del Senado.¹³ Los tratados de paz, sin embargo, debían ser aprobados por el Congreso.¹⁴

Esta Constitución refleja una sumisión a los tratados internacionales aprobados por Cuba y, se basaba esencialmente en lo concerniente a los acuerdos de los Consejos Provinciales¹⁵ y los adoptados por los Ayuntamientos.¹⁶ Dichos acuerdos podían ser suspendidos por el Gobernador de la provincia o por el Presidente de la República para el caso de los acuerdos provinciales y, para los acuerdos de los ayuntamientos, se sumaba el Alcalde. Estos funcionarios tenían a su cargo la consideración de si tales acuerdos eran contrarios o no a los tratados aprobados por nuestro territorio nacional. Esta Ley Fundamental era omisa en cuanto a la recepción y jerarquía de los tratados internacionales.

Posteriormente, en la Constitución aprobada el 1 de julio de 1940 se incluyó una prohibición expresa de celebrar pactos o tratados internacionales que menoscabaran la soberanía nacional o la integridad del territorio nacional.¹⁷ Dejaba al Presidente de la República, aunque asistido del Consejo de Ministros, la celebración de tratados internacionales. Establecía también, la

¹¹ Para una consulta completa de los textos que han signado la historia constitucional cubana y de los que se hacen mención en este artículo. Vid. PRIETO, M., *Selección de textos constitucionales cubanos*, Félix Varela, La Habana, 2003. [Passím]

¹² Cfr. Título VII, Sección Primera, Artículo 68, apartado 7.

¹³ Cfr. Título VI, Artículo 47.

¹⁴ Cfr. Título V, Sección Quinta, Artículo 59

¹⁵ Cfr. Título XI, Sección Segunda, Artículo 93, apartado 1 y Artículo 96.

¹⁶ Cfr. Título XII, Sección Segunda, en el Artículo 108.

¹⁷ Cfr. Título Primero, Artículo 3.

aprobación del Senado como requisito para su validez en nuestro país¹⁸. La aprobación de los tratados de paz se delegó al Congreso. En materia de tratados internacionales esta Carta Magna tampoco resolvía la omisión a cerca de la recepción y jerarquía de los tratados en relación con las normas jurídicas internas.

Como consecuencia del triunfo revolucionario del primero de enero de 1959, tuvieron lugar una serie de radicales cambios, y fue promulgada la Ley Fundamental del 7 de febrero de 1959. La misma con relación a los tratados internacionales establecía, que el Presidente de la República tenía a su cargo la celebración de éstos,¹⁹ los cuales requerían, para tener validez en nuestro país, la aprobación del Consejo de Ministros.²⁰ Esta Constitución dejaba en manos de un órgano colegiado la máxima responsabilidad en relación con los tratados internacionales y, tampoco realizó referencia expresa en cuanto a la recepción y jerarquía de los tratados internacionales en nuestro país.

La Constitución de 1976,²¹ en su Artículo 11, encuentra un primer pronunciamiento acerca de los tratados internacionales, repudiando y considerando ilegales y nulos los tratados, pactos o concesiones concertados en condiciones de desigualdad o que desconocen o disminuyen la soberanía e integridad territorial de nuestro Estado. Añadiendo que las relaciones económicas, diplomáticas y políticas con cualquier otro Estado no podrán ser jamás negociadas bajo agresión, amenaza o coerción de una potencia extranjera.

En relación con esto se pronuncia el Artículo 12, donde son expuestos en diferentes incisos una serie de principios que ha de tener en cuenta nuestro Estado para la conclusión de tratados y de modo general para sus relaciones internacionales. En tal precepto se evidencia el respeto de nuestro país por los principios fundamentales contenidos en la Carta de las Naciones Unidas, como norma *ius cogens* y en otros tratados de los que es signatario. Reafirmando además, la voluntad de integración y colaboración de Cuba con otros países, y su respeto a la soberanía de otros pueblos. Defiende además, el derecho

¹⁸ Cfr. Título X, Sección Segunda, Artículo 142, inciso g) y Título IX, Sección Segunda, Artículo 122, inciso h).

¹⁹ Cfr. Título X, Sección Segunda, Artículo 129, inciso d).

²⁰ Cfr. Título IX, Sección Primera, Artículo 119, Artículo 120, inciso c) de la Sección Segunda y Artículo 121, inciso m), de la Sección Tercera.

²¹ La Constitución de la República de Cuba fue proclamada el 24 de febrero de 1976 y publicada en la Gaceta Oficial Especial No. 2 del 24 de febrero de 1976. (Actualizado 7 de julio 2003)

irrenunciable y soberano de todo Estado a regular el uso y los beneficios de las telecomunicaciones en su territorio, rechazando la violación de tal derecho cuando esté siendo desarrollado conforme a la práctica universal y a los convenios internacionales suscritos.

Por su parte el Artículo 23 dispone que el uso, disfrute y disposición de los bienes pertenecientes al patrimonio de las empresas mixtas, sociedades y asociaciones económicas que se constituyen conforme a la ley, se rijan por lo establecido en la ley y los tratados,

Respecto a los órganos del Estado involucrados en trámites referentes a los tratados, se precisa que la Asamblea Nacional del Poder Popular, según el Artículo 75, inciso i), tendrá entre sus atribuciones la aprobación de los tratados de paz. Al Consejo de Estado, según lo refrendado en el Artículo 90, inciso m), se le contempla como una de sus atribuciones, la ratificación y denuncia de los tratados internacionales. Es al Consejo de Ministros, de acuerdo a lo regulado en el Artículo 98, inciso ch), a quien compete aprobar tratados internacionales y someterlos a la ratificación del Consejo de Estado.

Lo cierto es que esta Constitución refleja un silencio en cuanto al sistema de recepción acogido por nuestro país y, en consecuencia, sobre la jerarquía de los tratados internacionales dentro del ordenamiento jurídico cubano al no declararse expresamente en ninguno de sus preceptos tales cuestiones, existiendo por tanto una laguna constitucional al respecto. Regulando solamente una serie de principios a tener en cuenta por nuestro Estado para llevar a cabo sus relaciones internacionales y, las atribuciones de algunos órganos en lo relativo a la aprobación y posterior manifestación del consentimiento para que el Estado cubano se obligue con tal tratado.

III. CONSIDERACIONES EN TORNO A LA RECEPCIÓN Y JERARQUÍA DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CUBANO

Toda Constitución es una declaración de principios donde se establecen preceptos generales que *a posteriori* serán desarrollados por otras normas complementarias del ordenamiento jurídico, que en el caso concreto que nos ocupa lo constituyen el Decreto-Ley 191 de 1999 “De los tratados internacionales” y, sus normas complementarias, la Resolución 462 de 2008

sobre “Procedimiento de los tratados bilaterales”²² y la Resolución 49 de 2009 del “Procedimiento sobre los tratados multilaterales.”²³

El Decreto-Ley 191 del Consejo de Estado, de 8 de marzo de 1999 “De los Tratados Internacionales” fue promulgado para adecuar el procedimiento legal establecido en el Decreto-Ley 73 de 9 de agosto de 1983 a los mecanismos instituidos por las organizaciones internacionales para participar en tratados multilaterales, y el trámite requerido para el caso de las negociaciones bilaterales. Esta norma se compone de cinco capítulos y veintisiete artículos, una disposición especial, una transitoria y dos finales.

El Capítulo V “De la publicación de los tratados” regula los preceptos contenidos que guardan relación con la recepción de los tratados internacionales.²⁴ El Artículo 26 plantea: *“La información sobre la ratificación de tratados internacionales bilaterales por parte de la República de Cuba, así como su participación en tratados internacionales multilaterales y su entrada en vigor, debe ser publicada en la Gaceta Oficial de la República. De igual forma se publicará el término de la participación en cualquiera de los casos antes señalados.”*

A tenor de lo que establece este precepto y, teniendo en cuenta lo desarrollado en el epígrafe que destinamos a los sistemas de recepción, nos percatamos de que a la publicación de los tratados se le otorga un carácter informativo. Si se publica solamente la información de que nuestro Estado ha manifestado su consentimiento en obligarse con un tratado bilateral y que ha participado en uno multilateral y su entrada en vigor, así como los términos de la participación en ambos casos, se derrumba la posibilidad de que la publicación constituya un acto equivalente a la promulgación de los tratados y, que de tal manera surtan efectos en el ámbito interno.

El Artículo 27 regula que: *“El Presidente del Consejo de Estado y del Gobierno puede ordenar que se publique íntegramente el texto del tratado o solamente una información sobre la ratificación, adhesión, aceptación o aprobación.”* Es evidentemente, según lo contenido en este precepto, que la publicación íntegra del tratado pierde toda su fuerza al darle la facultad de tal decisión al Presidente del Consejo de Estado. Lo cierto es que cuando para la plena

²² Publicado en la Gaceta Oficial No. 004 Ordinaria de 4 de febrero de 2009.

²³ Publicado en la Gaceta Oficial No. 018 Extraordinaria de 2 de junio de 2009.

²⁴ Los capítulos previos guardan relación con el trámite inicial, la firma y la custodia de los tratados.

eficacia de un tratado en el ordenamiento nacional, la publicación es requisito esencial, la misma se convierte en un elemento de significativa importancia en el sistema de recepción de éstos, y tiene grandes repercusiones en el proceso de aplicación de los mismos, en especial en la vía judicial.

Indudablemente la publicación de los tratados cumple con la exigencia de *publicidad* de las normas, requisito imprescindible para que las mismas sean eficaces a sus destinatarios y, muy especialmente, a los particulares. La publicación tiene un significado especial respecto a los jueces y tribunales que tan sólo podrán recurrir al tratado como fundamento de una decisión si el mismo ha sido previamente publicado. Quedando excluida definitivamente la aplicación judicial de los denominados tratados secretos.

La publicación oficial de los tratados produce además, otro importante efecto y es que al juez nacional le compete de oficio la determinación de la existencia del tratado, el momento en que el mismo ha entrado en vigor y resulta de aplicación en nuestro ordenamiento, los sujetos a los que afecta y los derechos y obligaciones que del mismo se derivan. Desde esta perspectiva, los Artículos 26 y 27 de este Decreto-Ley, no exigen la publicación íntegra del texto del tratado en la Gaceta Oficial, lo cual deja abierta la interrogante de que si la publicación es válida para que el juez pueda deducir la aplicabilidad interna con plenos efectos del tratado. Por ello, lo regulado en estos artículos, deja de ser una disposición expresa sobre la recepción de las normas convencionales.

Este Decreto-Ley, además de regular deficientemente la cuestión de la publicación, y no establecer claramente la forma en que las normas convencionales serán válidas en el ámbito interno, tampoco se pronuncia sobre la jerarquía de los compromisos internacionalmente asumidos en nuestro ordenamiento jurídico. Lo cual no debería ser, ya que como norma específica de los tratados internacionales debía subsanar el vacío constitucional existente sobre tales cuestiones.²⁵

²⁵ Es importante hacer mención que el Artículo 77 de nuestra Ley de Leyes manifiesta que: "Las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular entran en vigor en la fecha que en cada caso determine la propia ley. Las leyes, decretos-leyes, decretos y resoluciones, reglamentos y demás disposiciones generales de los órganos nacionales del Estado, se publican en la Gaceta Oficial de la República." Podemos percatarnos claramente de que esta disposición excluye la publicación de los tratados.

Como también la excluye el Decreto No. 62 de 30 de enero de 1980, referente a las normas de publicación en la Gaceta Oficial. El cual en su apartado primero regula: "Las disposiciones de carácter general que dictan los organismos de la administración se publican en la Gaceta Oficial de la República", definiendo en su segundo párrafo a la disposición general como aquella que "debe ser cumplida fuera de los marcos del ordenamiento donde se dicta, por otros órganos u organismos estatales o las empresas o dependencias de éstos o interesa a las organizaciones sociales y de masas o a la población". Por tanto es evidente que en norma tampoco se incluyó la publicación de los tratados.

En la Resolución 462 de 2008, sobre “Procedimiento de los tratados bilaterales”, su Capítulo VII “De la vigencia del tratado” regula el Artículo 47 que: *“Determinada la fecha de entrada en vigor de un tratado, la Dirección Jurídica está obligada a comunicarlo de forma inmediata a los órganos estatales, organismos y entidades nacionales implicadas en su cumplimiento.”*

Tal precepto no menciona nada sobre la publicación de los tratados bilaterales como requisito para su vigencia, ni siquiera de una información sobre la manifestación del consentimiento, solamente que la Dirección Jurídica lo comunica a los órganos estatales, organismos y entidades nacionales implicadas²⁶ en su cumplimiento. Tampoco precisa la forma de tal comunicación, dejando abierta la interrogante de si los tratados bilaterales poseen una recepción automática y de si solamente es importante el conocimiento de éstos para los organismos implicados en su cumplimiento y no para la población en general y, para los jueces en particular.

Por su parte, la Resolución 49 de 2009 del Ministro de Relaciones Exteriores, del “Procedimiento sobre los tratados multilaterales” de 7 de mayo de 2009 establece en el Capítulo VII “De la vigencia del tratado”, Artículo 40: *“A partir de la fecha de la entrada en vigor del tratado multilateral para nuestro país, la Dirección Jurídica envía a la Secretaría del Consejo de Estado la proclama del mismo para su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.”*

De acuerdo a lo estipulado en este artículo, se evidencia la inaplicabilidad actual de los Artículos 26 y 27 del Decreto-Ley 191 de 1999; es decir, la cuestión de la publicación íntegra o no del tratado (por lo menos de los multilaterales), ya no se está haciendo de acuerdo a lo que sobre esto disponga el Presidente del Consejo de Estado y de Ministros, sino que del tratado se publica una proclama.

La misma contiene el acuerdo de ratificación del Consejo de Estado, lo cual no favorece el conocimiento por parte de los jueces y de la población en general acerca de los tratados multilaterales de los que Cuba es signataria; pues la publicación oficial es algo más que la mera difusión del texto legal, es la vía para garantizar el conocimiento, cumplimiento y aplicación del tratado. Por lo que tal precepto tampoco puede considerarse una regulación expresa sobre el sistema de recepción de las normas convencionales.

²⁶ En ambos casos, el subrayado es de los autores.

A MODO DE CONCLUSIÓN

La relación entre el Derecho Internacional y el Derecho Interno es compleja, por lo que todas las teorías que han tratado de explicarla, han sido fuertemente criticadas. No obstante, con la aplicación de ellas, las normas convencionales son reconocidas en el ámbito interno, a través de los sistemas de recepción empleados por los Estados para incorporarlas en sus ordenamientos jurídicos y darles cumplimiento.

La regulación de la recepción de los tratados internacionales en nuestra normativa es omisa, ya que nuestra Constitución no contiene un precepto que regule cómo las normas que ha generado el Estado cubano en el ámbito internacional tendrán validez en su territorio, ni la jerarquía que tendrán en el ordenamiento interno.

El Decreto-Ley 191 y sus Resoluciones complementarias, no salvan la omisión constitucional. Regulando deficientemente la cuestión de la publicación como mecanismo para que el tratado se integre al ordenamiento jurídico interno y, como vía para su conocimiento y aplicación. Ante estas deficiencias, tampoco se regula en tales normas el rango normativo de las normas convencionales, teniendo que deducirse éste de lo que implícitamente regulan algunas leyes ordinarias.

BIBLIOGRAFÍA

1. COLECTIVO DE AUTORES, *“Curso de Derecho Internacional”*, Manual. Editorial Progreso, Moscú, 1980
2. COLECTIVO DE AUTORES, *“Temas de Derecho Internacional Público”*, Félix Varela, La Habana, 2006
3. DÁVALOS FERNÁNDEZ, R., *“Derecho Internacional Privado”*, Félix Varela, La Habana, 2006 D’ESTÉFANO PISANI, MIGUEL A., *“Fundamentos del Derecho Internacional Público Contemporáneo”*, Tomo I. Ministerio de Educación Superior, La Habana, 1985
4. D’ESTÉFANO PISANI, MIGUEL A., *“Breve Historia del Derecho Internacional”*, Ciencias Sociales, La Habana, 2003
5. D’ESTÉFANO PISANI, MIGUEL A., *“Derecho de Tratados”*, Pueblo y Educación, La Habana, 1978

6. D'ESTÉFANO PISANI, MIGUEL A., *"Esquemas del Derecho Internacional Público"*, Tomo I, Pueblo y Educación, La Habana, 1977
7. D'ESTÉFANO PISANI, MIGUEL A., *Hans Kelsen y el Derecho Internacional*, en *"Revista Cubana de Derecho"*, No. 6, abril-mayo-junio, La Habana, 1992
8. DIEZ DE VELASCO VALLEJO, M., *"Instituciones de Derecho Internacional Público"*, Tomo I, Tecnos, Madrid, 1997
9. DIEZ DE VELASCO VALLEJO, M., *"Instituciones de Derecho Internacional Público"*, 5ª Ed., Tecnos, Madrid, 1980
10. MORÉ CABALLERO, Y., *La interrelación entre el Derecho internacional y el Derecho internacional en Cuba a la luz de las doctrinas tradicionales*, en *"International Law: Revista colombiana de Derecho internacional"*, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Nro. 9, Mayo 2007,;
11. PASTOR RIDRUEJO, A., *"Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales"*, 5ª Ed., Tecnos, Madrid, 1994
12. PASTOR RIDRUEJO, A., *Lecciones de Derecho Internacional Público*, 2. Ed., ampliada y revisada, Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Derecho, Sección de Publicaciones, 1983
13. PRIETO, M., *Selección de textos constitucionales cubanos*, Félix Varela, La Habana, 2003
14. RODRÍGUEZ CARRIÓN, ALEJANDRO J., *"Lecciones de Derecho Internacional Público"*, 2ª Ed., Tecnos S.A, Madrid, 1990
15. TUNKIN, G., *"Curso de Derecho Internacional"*, Tomo I, Progreso, Moscú, 1979.

Recibido: 240902009

Arbitrado: 120122010

Aprobado: 200602010

Datos de los autores

MSc. Yanitza ZALDÍVAR RODRÍGUEZ

yzaldivar@fh.uho.edu.cu

Institución: Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya

Lic. Lisandra GARCÍA LEYVA

población@hol.inv.cu

Institución: Dirección Provincial de la Vivienda de Holguín

Remberto A. SÁNCHEZ MARTÍNEZ

remberto-sanchez@fh.uho.edu.cu

Institución: Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya